

# Una mirada a Centroamérica

Chema Castán

Castán, periodista y coordinador de una ONG, señala algunos de los problemas económicos y sociales que, en Centroamérica, mantienen a la mayor parte de la población en la pobreza más absoluta.

“ Es el propio poder económico y financiero mundial el que genera y mantiene una serie de conflictos que impiden el progreso de las clases desfavorecidas en esos territorios. ”

Cuando nos hablan de pobreza en los países del Sur, solemos imaginarnos esa realidad de niños en la calle, de hombres deambulando en busca de trabajo, de mujeres elaborando la comida en hornos de leña, bajo techos de madera y un montón de mosquitos revoloteando. Esa es la imagen clásica de la pobreza transmitida por los medios de comunicación. Y es parte de la realidad, o más bien es la consecuencia de la realidad. Pero los medios no suelen divulgar las causas que llevan al empobrecimiento de millones de mujeres, hombres, niñas y niños en el mundo. Pareciera que las causas son los desastres naturales, los gobiernos corruptos o que en esas partes del mundo no existen recursos para que la población genere ingresos.

La realidad es bien distinta, ya que es el propio poder económico y financiero mundial el que genera y mantiene una serie de conflictos que impiden el progreso de las clases desfavorecidas en esos territorios,

apoyados, eso sí, por las políticas neoliberales de los gobiernos locales y la complicidad interesada de las grandes potencias. Y como muestra, un botón: Centroamérica.

Esta región, más en concreto los países del llamado CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) está impregnada por una serie de conflictos que afectan a la población en general y a la más vulnerable en particular.

A pesar de ser un territorio con fuerte vocación campesina, en estos países han aumentado las dificultades de autoproducción de alimentos para consumo propio y, por tanto, es mayor la dependencia de productos externos. En Guatemala, por ejemplo, con la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se introdujeron nuevas especies de semillas y se perdieron las criollas, las autóctonas, con lo cual el sector campesino debe pagar para conseguir semillas cuando antes las almacenaba de su propio. Los valo-



res de desnutrición afectan al 50 por ciento de la población y sobrepasan el 80 por ciento en áreas rurales. Lo mismo en El Salvador, donde las medidas neoliberales aplicadas por los gobiernos en las últimas décadas, llevaron a la marginación del sector agropecuario, y ahora existe bastante dependencia de las importaciones de granos básicos, sobre todo del arroz. En Honduras, el porcentaje de población con inseguridad alimentaria continúa aumentando a medida que se acentúa la escasez de alimentos. Para marzo de 2011 el porcentaje de población afectada por inseguridad alimentaria severa se duplicó, pasando de 4.5% en octubre de 2010 a 10.4% en marzo de 2011. Y Nicaragua, que es un país de bajos ingresos y déficit alimentario, tiene problemas de disponibilidad de alimentos.

### LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La definición más común de exclusión social es: una escasez crónica de oportunidades y de acceso

a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, y al sistema de Justicia.

En Centroamérica, la exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas y de ascendencia africana, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas VIH positivas; pero, sobre todo, a la infancia. En El Salvador, Guatemala y Honduras, más de dos tercios de la población infantil son pobres.

La marginación económica, base o complemento de la exclusión política, afecta a amplios segmentos de población rural y urbana. La histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes entidades económicas, agrícolas y no agrícolas, ha producido un patrón distributivo de los beneficios del crecimiento económico profundamente desigual, y ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios sectores de la población.

Por lo general, las familias campesinas de escasos recursos no poseen el título de las tierras que trabajan. A pesar de que las tierras por las que luchan las comunidades son mayoritariamente áreas nacionales en las que han ejercido derecho de posesión, en varios casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua desde la firma de los respectivos acuerdos de paz, todavía éstas no han sido legalizadas a su favor. La ilegalidad de la tenencia de la tierra representa para las comunidades que la habitan un freno a la mejora de sus condiciones de vida, precarizadas, entre otras cosas, por la falta de acceso a recursos que les permitan trabajarla de forma sostenible.

El modelo de agricultura transnacional neoliberal no solamente ha significado el desmantelamiento de políticas de apoyo como el crédito, asistencia técnica e investigación, mercados seguros y precios justos, seguro agrícola y servicios básicos; sino que, además, ha impulsado



Fotografías: Chemo Castán

una dinámica creciente de acumulación de tierra por parte de grandes empresas (transnacionales en muchos casos) relacionadas con la explotación y exploración minera, hidroeléctricas, represas o plantaciones de monocultivos para biocombustibles.

Se calcula que existen al menos 381 proyectos para construir presas hidroeléctricas, a lo largo de Centroamérica y el sur de México. En Aragón ya sabemos de sobra que supone esto: desalojos y desplazamientos de población del campo a la ciudad, pérdida de tierras, destrucción del medio ambiente, impacto negativo en la flora y fauna... Detrás de esto, las multinacionales interesadas en captar los recursos naturales —sobre todo, el agua— y en monopolizar la producción de energía.

Además, en los últimos años, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador aprobaron leyes favorables a las inversiones mineras, y han estado otorgando cientos de conce-

siones, la mayoría a empresas transnacionales estadounidenses y canadienses. Por ejemplo, en Guatemala se han dado más de 550 concesiones, lo que afecta aproximadamente el 10% del territorio nacional, mientras en El Salvador están luchando contra empresas mineras estadounidenses y canadienses que buscan explotar las vetas de oro que se encuentran cerca del río Lempa, el cual constituye la principal fuente de agua para más de la mitad de los 6.2 millones de personas que viven en ese país.

“ En Centroamérica, la exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas y de ascendencia africana, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las personas VIH positivas; pero, sobre todo, a la infancia. ”

Los casos de violación de los derechos humanos relacionados con la actividad minera son cuantiosos y, al mismo tiempo, numerosas han sido y son las manifestaciones y acciones de los grupos campesinos e indígenas afectados por las exploraciones y explotaciones mineras.

## LA INSEGURIDAD CIUDADANA

La violencia criminal organizada se ha extendido ya a todos los países de la región centroamericana. El asentamiento del narcotráfico en determinados territorios del Norte de Guatemala, de Honduras, El Salvador y la Costa Caribe nicaragüense, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el *feminicidio* y la violencia protagonizada por maras y pandillas son realidades que minan también la posibilidad de un desarrollo transformador en la región.

Sin embargo, los gobiernos del istmo y sus aliados financieros —el Banco Mundial o Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros—

centran su atención en el impacto negativo que esta realidad supone para el crecimiento económico y la inversión privada del exterior. Es por ello que su estrategia para afrontar la inseguridad ciudadana se centra en el combate al crimen organizado, y aborda de forma marginal las acciones de prevención y rehabilitación. La estrategia es por tanto militar y policial, apunta a hacer frente a los efectos y no a las causas de la violencia ni a las debilidades estructurales del sistema en general y de los gobiernos nacionales en particular.

Lo cierto es que en Guatemala, sobre todo, existen municipios enteros controlados por los narcos, y se están generando nuevas formas de trata de personas, sobre todo de las mujeres, utilizadas como “mulas” transportadoras de droga. La violencia hacia las mujeres se agranda, se producen nuevas formas de migración con fines de tráfico ilegal, y los asesinatos están a la orden del día.

La tendencia del narcotráfico consiste en seguir buscando cómo ocupar territorios estratégicos en la región para canalizar su mercancía hacia Estados Unidos, pero también hacia los propios territorios que ocupa, con lo que eso supone también de impacto negativo en la población, sobre todo juvenil, más vulnerable al consumo. Y esa ocupación se está dirigiendo desde Guatemala hacia los países del Sur de Centroamérica. Y en este marco, se ejerce con todo tipo de formas de violencia contra las mujeres, y con una escalada brutal del *feminicidio*. Los datos son aterradores: según el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en Honduras, El Salvador y Guatemala fueron asesinadas en 2010 más de 1.530 mujeres y la nación con más casos fue Guatemala, con 685 muertes violentas. En ese país, los datos del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), indican que entre 2002 y 2011 murieron de forma violenta 5.027 mujeres. Sólo en 2010 se reportaron 784 ase-

sinatos, 50.000 denuncias anuales por violencia intrafamiliar y 10.000 violaciones. El índice de impunidad, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es del 98 por ciento.

En El Salvador, 580 mujeres fueron asesinadas durante 2010: el 31% fueron víctimas menores de 25 años. La mayoría de estas muertes, consumadas con arma de fuego, fueron antecedidas de agresiones sexuales; muchas fueron cometidas con extrema crueldad. Algunos cuerpos fueron cercenados y abandonados en la vía pública.

“ La estrategia (para combatir la inseguridad ciudadana) es por tanto militar y policial, apunta a hacer frente a los efectos y no a las causas de la violencia ni a las debilidades estructurales del sistema en general y de los gobiernos nacionales en particular. ”

En Honduras, 1.700 mujeres fueron asesinadas entre 2008 y 2011. Los *feminicidios* se incrementaron en un 160% a raíz del Golpe de Estado. El 80% de las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y los *feminicidios* ocurrieron como resultado de crímenes múltiples cometidos sobre los cuerpos de las mujeres.

En Nicaragua, 76 mujeres fueron asesinadas en 2011 y en 2010 se registraron 89 casos. La mayoría de mujeres asesinadas fueron víctimas de sus cónyuges, parientes cercanos, tíos, primos o ex parejas, según registros de medios de comunicación.

A pesar de la gravedad del problema, en ningún caso existe voluntad política por parte de los Estados de la región para combatir esta masacre, pues han sido incapaces de tener una política efectiva de prevención, persecución y sanción de los

delitos de violencia machista y sexual (como lo obliga la Convención de Belem do Pará) y por tanto son cómplices de estos crímenes ya que, por omisión, también violentan los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas.

Esto es sólo una parte de la fotografía de Centroamérica en la actualidad. Nada o muy poco que ver con el contexto de crisis económica que se está viviendo en Europa. No es mi intención por tanto comparar si la realidad de aquí o allá es mejor o peor, sólo espero que este artículo contribuya a conocer un poco más el contexto en el que actualmente se vive en este estrecho territorio, con una fuerte discriminación social y un montón de recursos que cada vez van siendo usurpados en beneficio de empresas ajenas.

Cambiar esta situación está en manos de la propia población. La cooperación de los países del Norte, de las ONG y de todo el movimiento solidario debería estar enfocada al fortalecimiento de las capacidades de estas mujeres y hombres para luchar contra las amenazas externas, incidir en las políticas públicas de sus gobiernos para atacar las causas y transformar una realidad, a todas luces negativa. La otra cooperación, la asistencial, la que se centra en paliar la pobreza con la atención a las necesidades inmediatas, puede resolver el pan para hoy, pero no el hambre para mañana.